

2026:

Claves para comprender el panorama político y electoral en España



Weber
Shandwick

1. Resumen ejecutivo

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión en la política española, un nuevo mapa político ilustra un sistema fragmentado y polarizado, donde las mayorías absolutas parecen cada vez más inalcanzables, y las alianzas se convierten en una necesidad estructural para la gobernabilidad.

2026 estará marcado por las **elecciones autonómicas** en regiones **estratégicas**, la **fragmentación ideológica** y el **reajuste de alianzas** en bloques políticos. **Temas como la gobernabilidad, la estabilidad presupuestaria, la transición verde y digital, la defensa y la gestión de los servicios públicos ocuparán el centro del debate**, mientras el Gobierno central busca sostener su programa en un entorno parlamentario frágil.

La capacidad de los partidos para adaptarse a un mapa político reconfigurado será determinante no solo para superar los retos inmediatos, sino también para definir las claves de la política nacional en los próximos años.



2. Un anticipo nacional: **Extremadura** y las dinámicas políticas que marcarán 2026

El adelanto electoral en Extremadura cerró 2025 con unos resultados que alteraron el tablero político, sin aportar la estabilidad esperada y dejando más interrogantes que certezas.

El PP obtuvo 29 escaños, cuatro por debajo de la mayoría absoluta, por lo que sigue necesitando a Vox, que duplicó fuerza hasta 11 escaños. El PSOE sufrió un desplome histórico: 18 escaños y una pérdida de 14 puntos porcentuales, evidenciando una crisis estructural del voto socialista. Unidas por Extremadura creció a 7 escaños, capitalizando el desencanto progresista.

Con un 2026 marcado por citas clave en Aragón, Castilla y León y Andalucía, los principales partidos enfrentan desafíos significativos: el PSOE deberá abordar su fragilidad, el PP lidiar con su fracaso estratégico y redefinir su estrategia de alianzas y Vox consolidar su papel como fuerza en auge. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra ante un escenario lleno de incógnitas, con factores que podrían condicionar su gestión en un contexto complejo y polarizado.



3. Implicaciones Macropolíticas y Dinámicas Nacionales

Las implicaciones de Extremadura trascienden significativamente lo territorial y operan en al menos cuatro dimensiones de relevancia nacional.

Primera dimensión: el debilitamiento del PSOE y sus consecuencias para la gobernanza de Sánchez

El resultado de Extremadura funciona como test acerca de si la crisis de gobernanza que rodea a Sánchez representa un problema coyuntural (atribuible a circunstancias específicas de la región) o estructural (reflejo de una erosión nacional de la marca socialista). El hecho de que el PSOE obtuviera su peor resultado histórico en una región históricamente socialista y de que lo hiciera bajo liderazgo de un candidato directamente imputado por presuntos casos de corrupción vinculados al presidente, sugiere que la crisis es estructural antes que coyuntural.

Aunque fuentes del Gobierno han rechazado que Extremadura ponga en riesgo la viabilidad del Ejecutivo, la acumulación de derrotas en el ciclo electoral que el PP ha planificado (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía en 2026) podría generar presiones internas en el PSOE que desestabilicen la posición de Sánchez. La debacle extremeña

no es causalmente independiente del estado general de erosión de la coalición progresista que sustenta al Gobierno.

El análisis de la cúpula socialista nacional sugiere que Sánchez confía en la recuperación de voto en futuras elecciones generales, asumiendo que la desmovilización de 2025 es reversible cuando los incentivos para la participación sean mayores. Sin embargo, esta interpretación descuida que parte del voto perdido ha emigrado a opciones políticas (Vox, UpE) que representan reconfiguraciones ideológicas, no meramente transferencias contingentes.

Segunda dimensión: el fracaso relativo de la estrategia electoral del PP y la reconfiguración de sus relaciones con Vox

El PP anticipó las elecciones de Extremadura con dos objetivos: primero, demostrar que podía gobernar sin dependencia de Vox; segundo, generar un efecto de “bola de nieve” que debilitara progresivamente al PSOE en el ciclo electoral de 2026.



En ambas dimensiones, el resultado fue parcialmente fallido. Guardiola no obtuvo mayoría absoluta, lo que significa que el PP seguirá dependiendo de Vox. Además, lejos de debilitar a Vox, la estrategia de confrontación generó el efecto inverso: Vox creció significativamente, posicionándose como llave de negociación más poderosa.

Esta dinámica obliga a una reconfiguración de la estrategia nacional del PP. Según análisis de fuentes del partido, Génova ha reinterpretado el resultado no como derrota sino como consolidación de un “bloque de derechas” que en Extremadura concentró el 60% del voto (PP + Vox). Esta reconfiguración narrativa —de confrontación a coalición ideológica— representa un giro táctico que anticipa que el PP abandonará la estrategia de “pinchar la euforia demoscópica” de Vox para adoptar una de gestión de coaliciones amplias.

Tercera dimensión: Vox como actor estructural redefinido

El crecimiento de Vox en Extremadura no es un fenómeno aislado. Coincide con un momento de reposicionamiento estratégico de la ultraderecha tras la ruptura de gobiernos autonómicos en 2024. La decisión de Santiago Abascal de abandonar ejecutivos autonómicos fue un cálculo que apostaba por que una estrategia de confrontación ofrecería mayores réditos políticos que la participación en gobiernos de coalición.

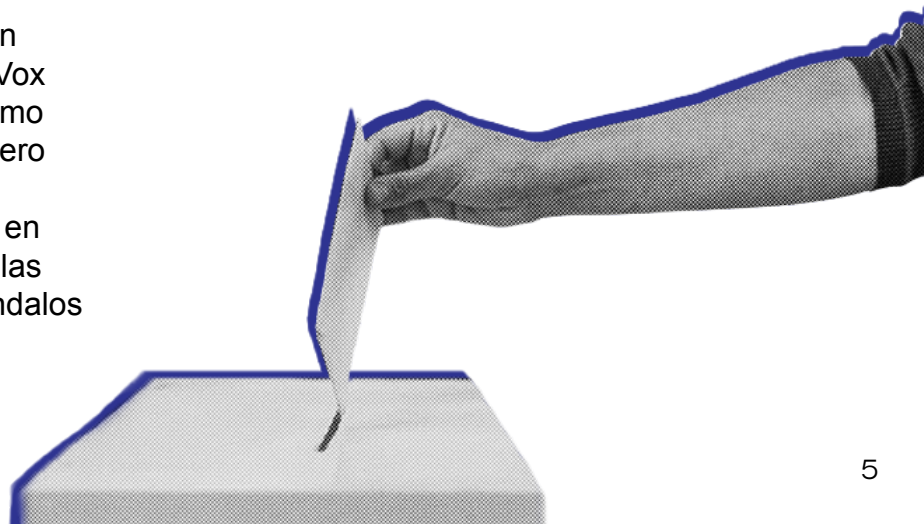
Los resultados de Extremadura validan esta apuesta. Vox duplicó su representación parlamentaria, elevó su presencia media nacional y se consolidó como actor indispensable en cualquier construcción de mayorías. Más allá, la narrativa de Vox como fuerza rupturista con el bipartidismo —que reproduce el discurso del 15M pero desplazado hacia la derecha— parece haber encontrado resonancia electoral en un contexto de crisis de legitimidad de las instituciones políticas y múltiples escándalos de corrupción.

Esta trayectoria de Vox tiene implicaciones nacionales profundas. Si el patrón se reproduce en Aragón, Castilla y León y Andalucía durante 2026, Vox consolidaría su posición como tercera fuerza política nacional con capacidad de veto en la mayoría de Comunidades Autónomas. Esto redistribuiría sustancialmente el poder político hacia la ultraderecha, tanto en términos de gobernanza territorial como de presión sobre la política nacional del PP.

Cuarta dimensión: síntomas de polarización y fragmentación del sistema de partidos

El mapa político de Extremadura tras las elecciones refleja un sistema que se polariza y fragmenta simultáneamente. La concentración del 60% del voto en PP y Vox, combinada con la existencia de un PSOE debilitado, pero aún presente (18 escaños) y una izquierda alternativa en ascenso (7 escaños), dibuja un escenario de creciente dificultad para construir mayorías estables.

Esta fragmentación no es exclusivamente horizontal (múltiples actores), sino también vertical (polarización ideológica en los extremos). La ausencia de posibilidades de gobierno de centro o gran coalición (PSOE + PP sumaría 47 escaños, insuficientes para mayoría), combinada con la incompatibilidad ideológica evidente entre Vox y la izquierda, genera un panorama donde las coaliciones son difíciles y los gobiernos potencialmente frágiles.



4. **Tendencias** en la **política española para 2026**

El año 2026 estará condicionado por un ciclo electoral autonómico clave (Aragón, Castilla y León y Andalucía), la debilidad parlamentaria del Gobierno central, una agenda judicial con impacto en PSOE y PP, y la normalización de pactos regionales entre PP y Vox. Todo ello se produce en un contexto de creciente debate sobre la viabilidad de la legislatura nacional y de emergencia de retos transversales como la digitalización, la ciberseguridad y la gestión territorial.

En este sentido, en este informe se analizarán dos aspectos clave: el calendario electoral autonómico y los principales temas que coparán la agenda política en el año 2026.

A. Calendario electoral autonómico

Aragón

Las elecciones del 8 de febrero se celebrarán tras un adelanto electoral motivado por el bloqueo presupuestario, en un contexto similar al de otras comunidades. Aragón cerró en 2023 una larga etapa de gobiernos de pacto encabezados por el PSOE para dar paso a un Ejecutivo PP-Vox, roto también en julio de 2024.

Las encuestas anticipan una victoria del PP rozando la mayoría absoluta, un fuerte avance de Vox y un retroceso del PSOE, condicionado en parte por la candidatura de Pilar Alegría. El espacio regionalista mantendría presencia, aunque con riesgo de desaparición del PAR. Los ejes territoriales —agua, energía, despoblación e industria— seguirán estructurando la campaña.

Castilla y León

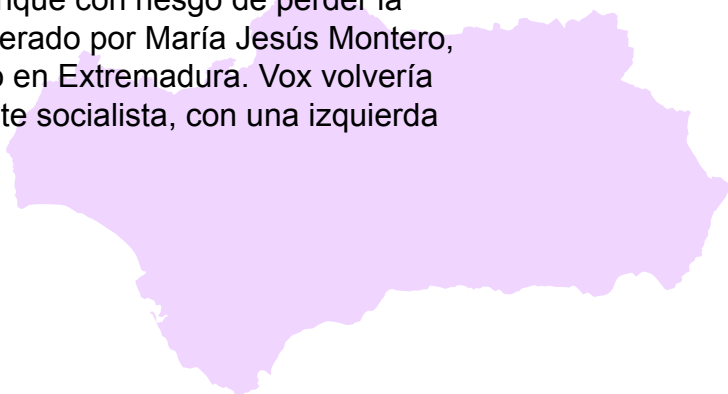
Las elecciones del 15 de marzo se celebrarán de forma ordinaria. Castilla y León, tradicional bastión del PP, ya experimentó un adelanto electoral en 2022 que dio lugar al primer gobierno autonómico con participación de Vox. Esta coalición, basada en afinidades en torno al mundo rural y la despoblación, se rompió en julio de 2024 por discrepancias ideológicas y la estrategia nacional de Vox.

Las previsiones apuntan a un PP lejos de la mayoría absoluta y a un crecimiento de Vox, lo que obligaría a renegociar un acuerdo de gobierno en condiciones más exigentes para la formación ultraderechista. El PSOE se mantendría competitivo, mientras que los partidos regionalistas (Soria ¡Ya!, UPL, Por Ávila) volverán a desempeñar un papel relevante en la gobernabilidad.

Andalucía

Las elecciones andaluzas están previstas para junio y se celebrarán al final natural de la legislatura. Tras décadas de hegemonía socialista, el PP gobierna con mayoría absoluta desde 2022 bajo el liderazgo de Juanma Moreno Bonilla, en una etapa marcada por estabilidad institucional y políticas fiscales expansivas.

No obstante, la legislatura ha estado atravesada por controversias relevantes, como la gestión de los regadíos en Doñana y la crisis del programa de cribado de cáncer de mama. Las previsiones actuales apuntan a una nueva victoria del PP, aunque con riesgo de perder la mayoría absoluta, mientras el PSOE, liderado por María Jesús Montero, afronta un deterioro similar al observado en Extremadura. Vox volvería a ser el principal beneficiado del desgaste socialista, con una izquierda alternativa fragmentada.



Temas más relevantes en campaña

En Castilla y León, el tema que previsiblemente marcará la campaña y la agenda de todos los partidos, como viene siendo habitual en las últimas elecciones, serán todo lo que envuelve al mundo rural y el gran problema de la Comunidad: la despoblación. Siendo el mundo rural el gran tema, podremos observar discursos y planes enfocados a incentivar a la juventud vivir en zonas rurales despobladas y a que se produzca el tan necesario relevo generacional.

En Aragón, el eje central será la gobernabilidad y la estabilidad presupuestaria, junto con políticas medioambientales, energéticas y de lucha contra la despoblación. Destacarán el debate sobre el uso del agua del Ebro, las infraestructuras hidráulicas y la expansión de los centros de datos como motor económico, un ámbito que genera consenso social pese a su impacto territorial.

En Andalucía, la campaña para las elecciones de junio de 2026 girará en torno a la gestión de los servicios públicos esenciales, especialmente sanidad y empleo, tras la polémica generada por la crisis en los cribados de cáncer de mama que ha situado la sanidad como uno de los principales problemas percibidos por la población. La estabilidad presupuestaria, el crecimiento económico y la percepción de gestión eficaz de Juanma Moreno contrastarán con las propuestas del PSOE-A para un cambio de etapa política, mientras Vox presionará con temas identitarios y de seguridad como parte de su agenda electoral.

B. Hablemos de Policy en España

La agenda política en España para este año priorizará políticas en vivienda, sanidad, presupuestos generales, transición verde y digital y medidas sociales ejecutivas, con más de 30 proyectos de ley pendientes en el Congreso y un énfasis en reformas que no dependan de mayorías parlamentarias frágiles. Estas tendencias responden a diversos retos y/u oportunidades actuales, como la fragmentación parlamentaria, los fondos europeos y una apuesta por la autonomía estratégica que obligue a tomar decisiones importantes en materias como clima, energía, inteligencia artificial y defensa.



Presupuestos y estabilidad económica.

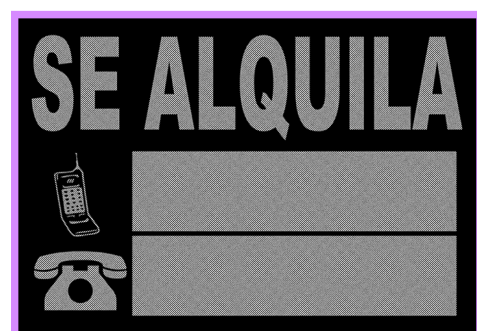
Los Presupuestos Generales para 2026 se tratan de una prioridad absoluta del Gobierno. Serán presentados en el primer trimestre pese a la existencia de una aritmética parlamentaria complicada. Por el momento, el Gobierno ha firmado la prórroga para alargar los Presupuestos aprobados en 2023. Se trata de la tercera prórroga consecutiva.

Paralelamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación del Fondo soberano España Crece, dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, para extender el impulso reformista de los fondos europeos Next Generation. Su objetivo es movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

Vivienda y derechos sociales.

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía española y, por tanto, un issue político prioritario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado un nuevo paquete de medidas dirigidas a aliviar el mercado del alquiler. Entre todas ellas destaca la bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que renueven los contratos de sus inquilinos sin subirles el precio del alquiler; así como la delimitación de los precios de los alquileres por habitaciones. Además, la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en que tiene que cambiar la concepción que existe sobre el modelo de la vivienda: “de hablar de negocio a hablar de derecho”.

Respecto a posibles medidas ejecutivas sociales, el presidente Pedro Sánchez ha pedido a su Consejo de Ministros propuestas disruptivas, sin pasar por el Congreso, como la revalorización de pensiones, un incremento salarial público, aumento del salario mínimo y un escudo social.



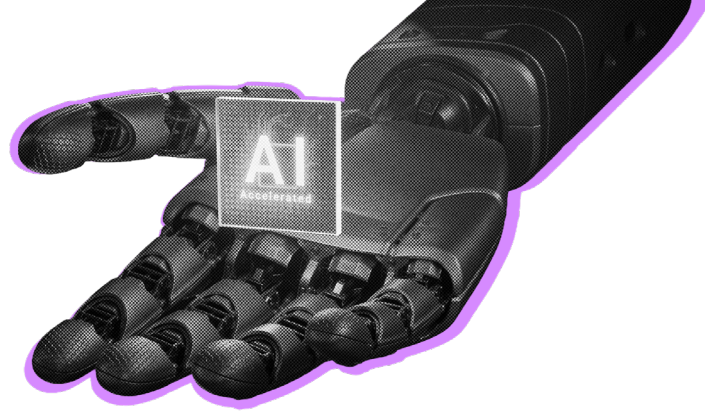
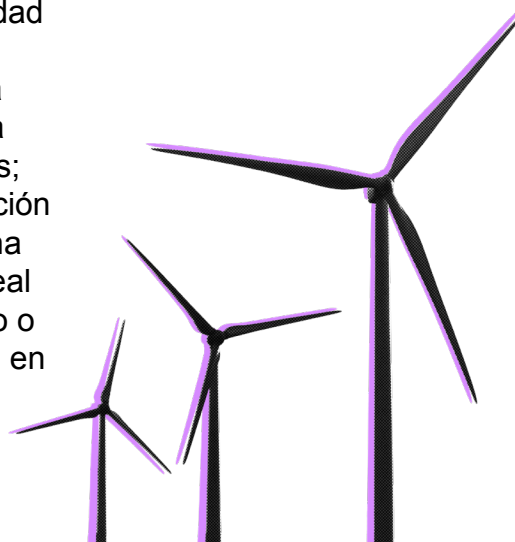
Sanidad.

El Gobierno priorizará en los Presupuestos Generales para 2026 el blindaje de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), reforzando atención primaria, ampliando la cartera de prestaciones y derechos asistenciales, con énfasis en equidad para migrantes y grupos vulnerables. Se incluye el Proyecto de Ley de Universalidad (estancado en Congreso pero en agenda), un Real Decreto para homogeneizar el acceso y una nueva Ley de Integridad del SNS a principios de 2026 que buscará limitar la colaboración público-privada con ánimo de lucro.



Transición verde, clima y energía.

Pese a la pérdida de importancia de la transición ecológica en la agenda de los gobiernos a nivel global, en España se prevé ciertos avances. Tanto por el empuje europeo en la materia como la prioridad del gobierno nacional, se prevé que para el año 2026 exista una intensificación legislativa en descarbonización con medidas clave para cumplir con los objetivos climáticos como la Ley de Movilidad Sostenible (ya en vigor, con impacto en ZBE y neutralidad climática para 2050), la concesión de ayudas por valor de 2.000 millones para la industria, las energías renovables y la movilidad eléctrica y soluciones térmicas; el Edificio Cero Emisiones vía actualización del Código Técnico de la Edificación (una transposición obligatoria en 2026), el Real Decreto 214/2025 de Huella de Carbono o el plan nacional de neutralidad climática en edificación.



Digitalización e Inteligencia Artificial.

En 2026, las prioridades políticas de España convergen en torno a la digitalización y a una serie de sectores estratégicos que actúan como palancas de competitividad, empleo y autonomía económica. La transformación digital, impulsada por la inteligencia artificial y el big data, se perfila como piedra angular del nuevo modelo productivo, con la expectativa de generar unos 480.000 puestos de trabajo y exigir una inversión sostenida en competencias TIC y formación avanzada. Al mismo tiempo, el Gobierno afronta el reto de regular el fenómeno del “shadow AI” para blindar la ciberseguridad y el cumplimiento normativo.

Defensa.

En defensa, el Ejecutivo afianza su compromiso con la modernización militar: más de 1.800 millones de euros se destinan a programas que abarcan capacidades terrestres, navales y ciber, mientras la puesta en marcha de 31 Programas Especiales de Armamento consolida la industria nacional y refuerza la soberanía tecnológica en consonancia con los objetivos de la OTAN.

Sector Agroalimentario.

El sector agroalimentario, por su parte, encara 2026 con una hoja de ruta de innovación y bioeconomía que combina digitalización rural y biotecnología, a la vez que se abren negociaciones clave sobre la futura PAC que condicionarán el flujo de ayudas al campo.

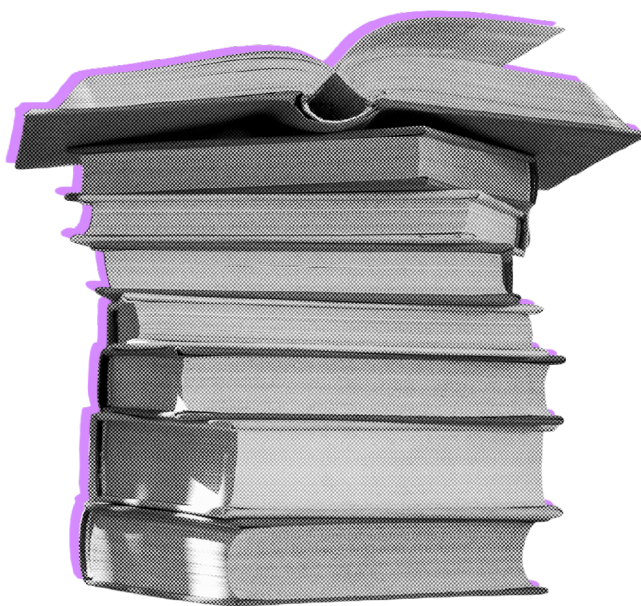


Turismo e Industria.

El turismo español mantiene su liderazgo con un incremento previsto de la conectividad aérea y la diversificación de la oferta, aunque deberá responder a la creciente competencia mediterránea. Por su parte, la industria encara un ejercicio decisivo para acelerar la transición hacia la “Industria 4.0”, equilibrando la modernización tecnológica con la necesidad de talento especializado y medidas anticíclicas para mitigar la desaceleración productiva. En conjunto, estas palancas sectoriales delinean la agenda política de 2026, exigiendo una acción pública coordinada que maximice oportunidades e impulse la resiliencia económica del país.

Educación.

La educación y la política universitaria ocuparán un lugar destacado en la agenda política española en 2026 debido a debates ya abiertos y a reformas en curso. En los últimos años, la aprobación y aplicación de nuevas leyes educativas y universitarias ha generado una fuerte confrontación política entre partidos, comunidades autónomas y actores del sistema educativo. Cuestiones como la financiación de las universidades públicas, el papel de las privadas, la autonomía universitaria y los modelos de gobernanza seguirán siendo objeto de disputa parlamentaria y territorial.



Otros: Regulación de grupos de interés.

En 2026, España refuerza el control sobre los lobbies con la Ley de Transparencia e Integridad: registro público obligatorio para unas 28.000 entidades, código de conducta, huella normativa y trazabilidad de contactos, con sanciones de hasta dos años. La norma se coordina con reformas estatales y autonómicas y sigue criterios UE/OCDE.

¿Cómo puede ayudarte Weber Shandwick?

Weber Shandwick, a través de su [departamento de Public Affairs en España](#), ofrece una amplia experiencia en el ámbito de los procesos políticos y regulatorios.

Nuestro equipo puede proporcionar **apoyo especializado** para comprender los factores que influyen en el entorno institucional y legislativo, identificando los aspectos que resultan más relevantes para la actividad empresarial y facilitando una **respuesta estratégica y eficaz ante ellos**.

Contamos con profesionales en asuntos públicos que colaboran estrechamente con sus áreas de análisis del consumidor y de estrategia, combinando un profundo conocimiento del panorama político con avanzadas capacidades de comunicación.

